

Perú: La vertiginosa irrupción de Fujimori. Buscando las razones de un sorprendente resultado electoral

ROMEO GROMPONE *

EN LAS elecciones presidenciales y parlamentarias del 8 de abril de 1990 la votación obtenida por Vargas Llosa, representando al Frente Democrático (FREDEMO) superó en pocos puntos a la de Alberto Fujimori, del movimiento Cambio 90. De acuerdo a lo dispuesto por la constitución peruana los ciudadanos debían optar en una segunda vuelta electoral entre estos dos candidatos (por ser los postulantes que alcanzaron las dos primeras mayorías relativas). Los resultados de estos comicios provocaron un sentimiento generalizado de sorpresa y desconcierto entre las élites políticas, periodistas, consultores internacionales, expertos en el estudio del mercado político, sociólogos y politólogos: En suma, entre quienes trataban de orientar o formar a la opinión pública y aquellos que asumían estar en las mejores condiciones, por sus conocimientos e información, para interpretar los cambios recientes ocurridos en la sociedad y en la voluntad de los ciudadanos.

Este pronunciamiento electoral puso en evidencia, como un golpe o una acusación, el inocultable distanciamiento que existía entre las percepciones que algunos grupos tenían de la realidad social del país y la manera en la que esta misma realidad se expresaba, a través de los sectores populares, de modo tumultuoso e imprevisible.

Lo cierto es que en las encuestas que siguieron durante los meses anteriores, las tendencias y las oscilaciones de los electores, la súbita aparición de Fujimori se registra como una interferencia que rompe con todos los pronósticos previos, como un misil que partiendo de un refugio desconocido se eleva a una inusitada velocidad y consigue dar en el blanco. En dos semanas, el porcentaje de preferencias por el conductor de un movimiento llamado Cambio 90, el cual aparentemente no había desarrollado una labor sistemática para concitar el apoyo del electorado, se elevó (de acuerdo a las empresas especializadas en opinión pública) desde niveles que apenas superaban el 1%, hasta disputar el primer lugar frente a Mario Vargas Llosa.

El candidato del FREDEMO había ordenado su estrategia hasta un mes atrás partiendo de la seguridad de que iba a obtener un amplio margen a su favor. Todo su problema radicaba entonces, en garantizar en la cam-

* Instituto de Estudios Peruanos.

pañía final la obtención de una mayoría absoluta que le permitiera contar con una ventaja parlamentaria dispuesta a seguir sus planteamientos y que evitara, además, las vicisitudes de una segunda vuelta electoral.

Los resultados de los comicios alteraron sustantivamente el mapa político del Perú. Las dos candidaturas de izquierda descienden del 26% obtenido durante las elecciones presidenciales de 1985 al 10% de los votos; 7% para la Izquierda Unida cuyo candidato era Henry Pease y 3% para la llamada Izquierda Socialista con su candidato Alfonso Barrantes, alcalde de Lima en el período 1983 y 1986 y reconocido por simpatizantes y opositores como un líder que hasta entonces había mostrado inequívocamente una singular capacidad de vinculación con el electorado de procedencia popular, sólo eclipsada cinco años atrás por la irrupción política de Alan García. El APRA desciende en abril de 1990 del 48% obtenido en 1985 al 19% del total de votos emitidos. Estos resultados demostraban la capacidad de convocatoria que seguía manteniendo un partido que estando en el gobierno había llevado al país a la inflación y a la recesión económica más severas de la historia peruana. La opción de la derecha tradicional —a la que Vargas Llosa intenta inyectar el discurso ortodoxo del liberalismo como medio para salir al encuentro con una invocada modernidad— no llega a cuajar como la alternativa deseada por las mayorías.

Pasada la primera conmoción provocada por estos resultados y la toma de poder de Fujimori, los analistas acudieron rápidamente al recurso de las explicaciones *ex post facto*, procurando transmitir la sensación de que, aunque las razones llegaran demasiado tarde, cuando el juego ya se había realizado y los hechos cumplido, todo se volvía coherente. Así, se mencionaba el hartazgo de la población con respecto a la clase política, los errores estratégicos (por ejemplo la actitud excesivamente arrogante o sincera de Mario Vargas Llosa en lo relativo al efecto de las medidas económicas que tomarían los primeros meses de gobierno) y la falta de una opción de centro, espacio donde el APRA se movía tradicionalmente con fluidez y que con el fracaso del gobierno de Alan García quedaba vacante, a disposición de quien tuviera la suficiente lucidez y audacia para ocuparlo.

Otras explicaciones, menos sujetas a las presiones de la coyuntura inmediata, aludían a la creciente separación entre Estado y sociedad, a las dinámicas cada vez más autónomas de una u otra esfera y a la influencia de redes de comunicación mal conocidas por quienes formaban parte de lo que el más respetado de los historiadores peruanos, Jorge Basadre, llamara una vez el "Perú oficial". Los hechos sugerían la existencia de un rápido y eficaz intercambio de informaciones y de opiniones entre los sectores populares urbanos y campesinos. Los actores decisivos en la construcción de este nuevo ordenamiento iban desde el grupo emergente de los empresarios informales hasta los predicadores evangelistas, uno de ellos Carlos García, candidato a segundo vicepresidente en Cambio 90 y otros postulando a senadores y diputados dentro del mismo movimiento.

En la segunda vuelta electoral el APRA y las izquierdas aparecían como las fuerzas dirimientes. Los organizadores de la campaña del FREDEMO consideraron que conquistar la mayoría de este electorado resultaría una tarea infructuosa porque Vargas Llosa, durante toda su campaña, había atacado a estos agrupamientos políticos con singular radicalismo y vehemencia. El objetivo consistía más bien en suscitar un cambio en las actitudes y decisiones de aquellos que apoyaron a Fujimori, estimando que un pronunciamiento electoral tan inesperado debía, en consecuencia, resultar también extremadamente frágil, endeble y volátil. Por su parte, Mario Vargas Llosa cambió su imagen, dejó el traje y la corbata y con una indumentaria informal comenzó a recorrer los barrios marginales de Lima, exaltando las virtudes de un programa de compensación social que permitiría a los sectores más deprimidos sobrellevar los efectos del inevitable ajuste económico anunciado. Los periodistas, publicistas y políticos del FREDEMO, procuraron erosionar la figura de Fujimori, quien hasta entonces había aparecido como un profesional honesto, eficiente y libre de cualquier vínculo con la clase política tradicional. Así, se señalaba que su opción no era sino la continuidad del gobierno anterior, mostrando como prueba de ello al candidato (cuando era rector de la Universidad Nacional Agraria), conversando con Alan García en oportunidad de la visita del entonces presidente a este centro de estudios. Otras fotos destacaban la presencia de Fujimori en la llamada "aula magna" del partido aprista. También se intentó desmoronar la afirmación del candidato de Cambio 90 acerca de que había financiado su sobria campaña electoral vendiendo un tractor de su propiedad, demostrando que durante más de quince años había venido realizando un conjunto de operaciones inmobiliarias y en muchas de estas ventas había subvaluado el precio de las propiedades, con lo cual se le quería presentar como un evasor de impuestos. De esta manera, Fujimori ya no podía sostener su imagen de profesional modesto ante quienes planearon esta estrategia publicitaria, y aunque sus negocios no fueran necesariamente dolosos, la idea de transparencia y honradez inmaculada que había conseguido transmitir ya no podía sustentarse, lo que provocaría la desilusión y el rechazo de parte de su electorado.

En un segundo nivel, que Mario Vargas Llosa rechazaba explícitamente, los ataques se centran en los prejuicios étnicos y las creencias religiosas. Un vocero del FREDEMO, por ejemplo, declaraba que "la constitución histórica del Perú" —más allá de lo que las normas dispusieran— no iba a permitir que "un peruano de primera generación" pudiera ser electo presidente. La afirmación disimulaba mal o no le interesaba hacerlo, el hecho de que Fujimori pertenecía a una minoría étnica como la japonesa y aludía a algunas dificultades de expresión del candidato que podían atribuirse a su idioma de infancia, que no había sido el castellano. Con base en ciertos volantes de cuestionada autenticidad que circularon en Lima, en los que grupos evangelistas hacían alusión a los privilegios constitucionales de la

Iglesia católica, el arzobispo de Lima convocó a una procesión del Señor de los Milagros cuya imagen recorrió las calles de la ciudad.

En el intervalo entre primera y segunda vuelta, Fujimori se limitó a mantener su discurso de centro izquierda, que bastaba para ganar los votos del APRA y de los partidos de orientación socialista, sin que ello fuera en detrimento de su imagen de independiente. Su campaña privilegiaba las giras por las distintas provincias del Perú, a diferencia de Vargas Llosa cuya atención principal se centraba en la ciudad de Lima. El candidato de Cambio 90 no respondió a los ataques que se le dirigían, haciendo notar, sin embargo, su profesión de fe católica, respaldada por el hecho que sus hijos concurrían a colegios religiosos. Un *spot* publicitario de quince segundos insistía en que Fujimori era "un presidente como tú", contrastando con el sentimiento de distancia y frialdad que parecía transmitir Vargas Llosa, un escritor de éxito internacional al que podía suponerse al margen de las vicisitudes y problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los electores.

En la segunda vuelta nuevamente se presentó una ráfaga de encandilamiento y confusión. La legislación electoral peruana prohibió la difusión de los resultados de las encuestas desde dos semanas antes de los comicios; sin embargo, los sondeos, que de cualquier manera se seguían haciendo, indicaban una votación muy reñida. A cuarenta y ocho horas del 10 de junio de 1990, algunas empresas de opinión pública pronosticaban el triunfo del FREDEMO; sólo una de ellas preveía una ventaja de siete puntos a favor del candidato de Cambio 90. Muchos analistas estimaban que se estaba produciendo un cambio importante respecto de lo ocurrido en la primera vuelta. Los resultados finales fueron: 57% de los votos emitidos para Alberto Fujimori y 33.5% apoyando a Vargas Llosa. Las élites nuevamente resultaron sorprendidas, como si los acontecimientos anteriores no hubieran bastado para tomar precauciones y mostrarse prudentes.

El presente artículo intenta avanzar en el examen de algunos procesos ocurridos en la década de 1980, que explicarían el triunfo electoral de un candidato independiente y poco conocido. Estos procesos tienen que ver con las dificultades que ha debido enfrentar la democracia peruana para consolidar un sistema de partidos estable y la paulatina crisis de estas organizaciones en su capacidad de representación de los sectores populares; la debilidad de los grupos de interés y en general de las estructuras de mediación; las nuevas expresiones que en Perú manifiestan este persistente vínculo entre fisuras sociales y étnicas y las adhesiones electorales anteriores a la gestión de Alan García y la división de las izquierdas; la creciente gravitación de las actividades informales en la definición de comportamientos y valores, y finalmente, la gravitación de extensas redes de contacto interpersonal que compiten con los medios de comunicación en la formación de las opiniones y en la toma de decisiones.

LA DEBILIDAD DEL SISTEMA DE PARTIDOS Y LA CRISIS
DE LAS ESTRUCTURAS DE MEDIACIÓN

El advenimiento de la democracia en el Perú en 1980 sometió a los partidos políticos al desafío de definir algunos principios de articulación en una sociedad con profundas escisiones sociales, culturales, étnicas y regionales y en la cual, buena parte de la población ha vivido procesos de movilización, traslados de campo a ciudad, cambios de trabajo y redefinición de expectativas. En una situación con estas características, las organizaciones políticas encuentran al mismo tiempo más exigencias y mayor indefensión, y se ven obligadas a llevar a cabo síntesis provisionales en las que deben interpretar mensajes a veces contradictorios y estar atentas a las nuevas demandas.

En un contexto caracterizado por esta fluidez, si los partidos desean que el conjunto del sistema político adquiera visibilidad para las clases populares que están viviendo procesos de emergencia y de cambio, deben intentar establecer un marco estable de interrelaciones. Sólo afirmando este marco institucional los nuevos actores estarán en condiciones de identificar con claridad las vías de acceso para la presentación de sus demandas y avanzar en criterios más elaborados para evaluar la gestión de las élites. De lo contrario, en una sociedad convulsionada por la acción de grupos alzados en armas y los efectos de una severa crisis económica, un proceso democrático que pugna por afirmarse estará amenazado por el riesgo de la desconfianza y de la falta de credibilidad. Esta situación puede volverse inmanejable ante el fracaso de la gestión de los sucesivos gobiernos. En todo este período en el Perú no llegó a constituirse un sistema de partidos que obrara como referente para el conjunto de los ciudadanos. Para ilustrar algunas de las razones de esta condición de fragilidad, vale la pena tomar en cuenta tres momentos: las coyunturas políticas y electorales de 1980, 1985 y 1990.

Las primeras elecciones presidenciales posteriores a la caída del régimen militar ofrecían indicios de nuevas definiciones y realineamientos, los cuales parecían apuntar hacia la formación de un sistema de partidos competitivos con perspectivas de larga duración y posibilidades de reemplazos ordenados en el ejercicio del poder. Tanto Acción Popular como el APRA realizaban una amplia apelación, orientado el primero a presentar una imagen de centro derecha y el segundo de centro izquierda. Los discursos predominantes se distanciaban deliberadamente de cualquier invocación excluyente dirigida a ganar el apoyo de una clase social o un grupo de interés en particular (empresarios, obreros o campesinos), intentando más bien dar una imagen de reconocimiento y de eventual acogida a las pretensiones de todos los sectores. Los mensajes se destinaban a ciudadanos de distinta procedencia social o cultural aunque ello fuera en detrimento de las definiciones programáticas más precisas. Las fuerzas políticas predominantes se presenta-

ban abiertamente con el formato de partidos *catch all* (abiertos a todos los sectores), circunstancia que por lo menos en el corto plazo las obligaba a desarrollar actitudes de flexibilidad y tolerancia.

La izquierda, la cual se presentó dividida en las elecciones de mayo de 1980, se asumía como la representante de los nuevos actores populares cuya aparición había sido decisiva para entender el alcance de las transformaciones políticas y sociales durante las décadas anteriores. De hecho, sus diferentes partidos tendían a especializar su reclutamiento en distintos sectores del movimiento social: la clase obrera tradicional, los maestros y parte de los empleados públicos, los pobladores de los barrios marginales de Lima y sectores del campesinado y de las clases medias profesionales. La unidad del conjunto de estas izquierdas, lograda en los comicios municipales de 1980, le otorgó a esta opción una proyección mayor que la que podría haber alcanzado con la simple suma del apoyo de cada una de las organizaciones componentes, y la obligó a asumir funciones de mediación entre un sector significativo de las clases populares y el ámbito en el que se tomaban las decisiones públicas. Perú parecía encaminarse hacia un régimen de partidos ordenado en tres bloques: la coalición formada por Acción Popular y el Partido Popular Cristiano en un centro derecha; el APRA por el centro izquierda, y por último, el frente de las diversas fuerzas políticas de izquierda cuya influencia iba creciendo tanto que poco después asumiría responsabilidades de gobierno a nivel local.

El descrédito en que cae el gobierno de Belaúnde provocó cambios sustantivos en el espectro político. Alan García apeló a "todos los peruanos"; sin embargo, en este discurso en el que se llama a la concertación de voluntades de los ciudadanos, la apuesta de cambio iba por el lado de la afirmación del liderazgo personal. Así, un partido postergado por décadas llegó al poder y trasladó al conjunto de la sociedad el estilo populista propio de su organización. En el APRA resultaron siempre imprecisos los límites que separaban lo propio de una estructura política formal con una ideología definida, de aquellos rasgos característicos de un movimiento cuya unión se sustentaba en valores como la fraternidad y la fe. El funcionamiento regular de comités y sectores se supeditaba a la larga al liderazgo del jefe, en cuyas manos estaban las decisiones finales.

Alan García, el nuevo caudillo, caracterizando al Perú como una sociedad desorganizada, sin referentes e inorgánica, consideraba que la única articulación posible debía darse desde las alturas de la política y centrada en su exacerbado protagonismo personal, sin necesidad de otras mediaciones perturbadoras, para lo cual contaba con una expectativa confiada por parte de los sectores populares. El juego planteado por el presidente era de todo o nada. Un gobierno exitoso crearía un vínculo duradero entre García y las clases populares mientras que su fracaso afectaría no sólo su propia vigencia sino que arrastraría también al conjunto de los representantes políticos, quienes perderían la confianza de la ciudadanía en lo relativo a su capaci-

dad para afrontar las desventuras y dramas de una sociedad empobrecida. Las elecciones de 1985 mostraron a un electorado en un 80% inclinado al centroizquierda e izquierda y una grave crisis hacia la derecha del espectro. El juego político parecía seguir otras reglas que habrían sido difíciles de predecir cinco años atrás.

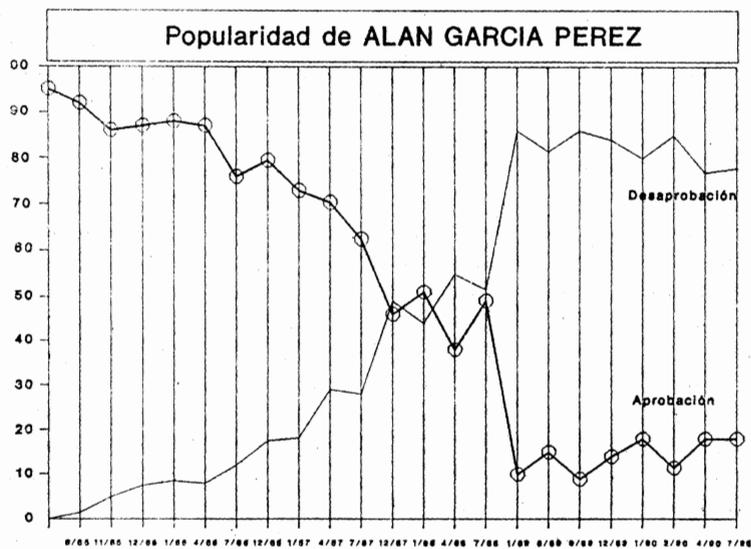
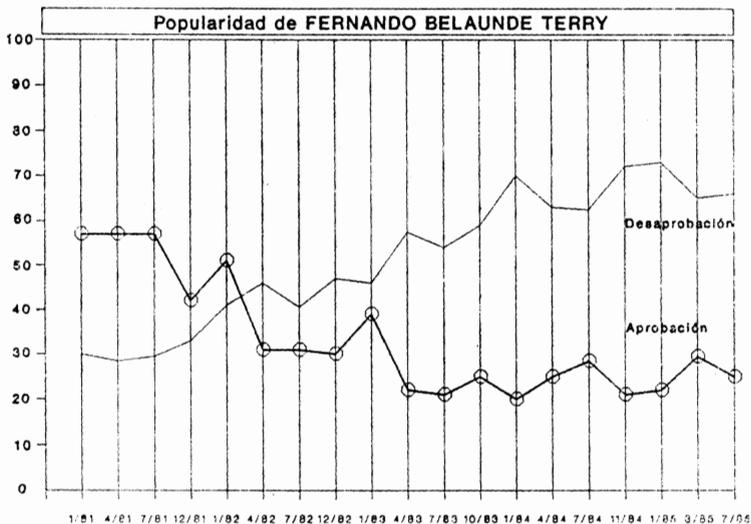
Los dos gobiernos democráticos funcionaron con mayoría parlamentarias, volviendo por lo general innecesarios los acuerdos estables entre las distintas fuerzas políticas y afectando la labor del propio Congreso subordinado a las iniciativas del Ejecutivo. Prueba de ello es el recurso frecuente a la delegación legislativa en términos tales que, apartándose del marco constitucional que considera a este instituto como aplicable a una materia precisa, requiriendo plazo y ley autoritativa, se utilizó de una manera amplia y general sobre un número indeterminado de leyes, incluyendo leyes orgánicas que revestían el carácter de disposiciones constitucionales (Bernales, 1989). En todos estos años, los resultados de las deliberaciones legislativas se sabían de antemano y las inquietudes por la negociación y el consenso sólo se presentaban eventualmente. Aun cuando existían indicios de la formación de un grupo de políticos profesionales provenientes de todas las tendencias, cada uno de los partidos podía quedar sujeto a su propia dinámica, sin identificar las oportunidades y los obstáculos que les sugirieran la modificación de posiciones y comportamientos.

El descrédito y el escepticismo que empezó a prevalecer en la opinión pública durante los dos últimos años del gobierno de Alan García, repitió en algunos rasgos lo que había ocurrido en el régimen anterior tal como puede advertirse en la siguiente gráfica. Únicamente que en esta ocasión, el resultado afectaba no sólo a este líder y a su partido, sino al conjunto de las élites políticas. El triunfo de Ricardo Belmont, candidato independiente en las elecciones municipales de Lima de 1989, resultaba una clara señal de esta pérdida de confianza.

Los partidos y frentes partidarios en las elecciones de 1990 apostaban a la polarización. En especial, Mario Vargas Llosa (sobre cuyas propuestas se ordenaban los ejes de discusión de toda la campaña electoral), presentaba un discurso con los rasgos propios de una suerte de jacobinismo de derecha. El candidato proclamaba un principio de articulación de intereses excluyente de todos los demás, basado en la difusión de la economía de mercado como la única base de sustentación de las ideas de progreso y como criterio infalible e inapelable para la toma, en cualquier circunstancia, de las decisiones correctas. El mensaje no ocultaba que la modernidad defendida tendría sus costos y que entre los marginados y excluidos se encontrarían importantes contingentes de las clases medias y populares. El mejoramiento de las condiciones de vida de estos grupos sólo podía resultar de un efecto de arrastre de largo plazo cuando el cambio irreversible propuesto comenzara a dar frutos.

GRÁFICA 1

INDICE DE POPULARIDAD DE FERNANDO BELAUNDE Y ALAN GARCÍA. 1981-1990



FUENTE: DATUM. Tomado de Revista Caretas 1119, julio 1990.

El discurso utilizado por el FREDEMO obligaba a separar dos temas que iban de la mano en el momento en que la mayoría de sus ciudadanos definían las adhesiones políticas: el crecimiento y la distribución (que aquí se relegaba y se subordinaba al primero). Esta propuesta conllevaba además un contenido fuertemente descalificador de los otros planteamientos y organizaciones políticas. El mencionado principio exclusivo de articulación hacía que se relegara a un segundo plano a todas las apelaciones que tomaran en cuenta la diversidad social y étnica del país, proyectando en cambio la imagen del FREDEMO como un enclave privilegiado de las clases dominantes tradicionales.

Las izquierdas, por su parte, no consiguieron superar el descrédito con que su división era juzgada por muchos de sus adherentes potenciales. Uno de sus sectores, la Izquierda Unida, pese al desmoronamiento de los regímenes de Europa del Este, no consigue o no le preocupa modificar su tradicional discurso leninista, presentando, como un espejo del FREDEMO, un principio articulador sustentado únicamente en criterios de clase (el jacobinismo de izquierda contemplando al jacobinismo de derecha). Su prédica asumía la representación del conjunto de las organizaciones populares, sin entender que con muchas de ellas había dejado de tener contacto, que otras habían perdido mucha de su capacidad de convocatoria y que los cambios en las condiciones de vida y de trabajo en los sectores medios y de bajos ingresos modificaban el contenido de su discurso tradicional. El otro frente, la Izquierda Socialista, confiaba más en el peso del liderazgo personal de Barrantes que en los intentos de renovación ideológica que las circunstancias exigían aunque probablemente no produjera en lo inmediato créditos electorales. La escasa votación de este núcleo se explica tanto porque a Barrantes se le percibe como a un integrante más de una desprestigiada clase política, cuanto por la falta de perspectivas que el electorado le atribuye a una izquierda dividida. El APRA recurrió a su estructura partidaria y tan sólo con ésta obtuvo una de las votaciones que (a pesar de ser de las históricamente más bajas de esta organización) le permitió situarse en una posición de expectativa para los años venideros.

En este ambiente de polarización, la candidatura de Fujimori (que no se apoyaba en estructuras orgánicas conocidas), se inicia con la novedad de que aportaba una cuota de moderación en el momento mismo en que todas las demás opciones se polarizaban. El espacio de centro y centro izquierda no estaba ocupado por ningún partido o candidato. De esta manera, Fujimori encontró las imágenes y el discurso convenientes para ubicarse rápidamente en esta posición, debido en parte a las omisiones y los excesos de quienes —hasta días antes de las elecciones en primera vuelta— no lo consideraron como un opositor digno de tomarse en cuenta.

La mencionada pérdida de influencia de los partidos no puede atribuirse únicamente a sus errores estratégicos. La creciente debilidad de los grupos de interés, aunada a procesos de atomización social, trajo como resultado

que en la década de 1980, algunos de los escenarios desde los cuales podía plantearse la articulación entre sociedad y política, como es el caso de los sindicatos obreros, el movimiento estudiantil y las asociaciones de pobladores, se encontraran en fases de desmovilización y decadencia. En este contexto, los partidos ejercen en algunos casos un monopolio de la representación, pero sus discursos parecen quedar suspendidos en el vacío, sin garantías de encontrar interlocutores que les permitan confrontar sus discursos con sus prácticas.

Así, en los años ochenta, se comprueba la pérdida de influencia del movimiento sindical organizado. Su base de reclutamiento y con ella de renovación de dirigentes y participantes, resulta cada vez más reducida. Los gremios de obreros van perdiendo importancia ante los de empleados y ambos resultan afectados por el crecimiento de las actividades informales. La propia condición obrera deja de estar asociada a la incorporación en un sindicato. Los gremios convocan a los asalariados de las empresas medianas y grandes y no a los de las pequeñas; reúnen a los trabajadores estables mientras que los eventuales quedan marginados de la organización. Estos límites de expansión del movimiento interrumpen y trastocan una larga tradición de experiencias de organización y defensa de demandas salariales, equidad en el trato, condiciones de trabajo adecuadas y rechazo de prácticas discriminatorias (Balbi, 1989). En la perspectiva de los actores directamente afectados, muchos de ellos inmigrantes y acostumbrados a pasar en el transcurso de su vida por distintas ocupaciones, la condición obrera aparece como un episodio más en su trayectoria laboral (Parodi, 1987). En contraste, el desempeño de algunas actividades independientes surge como un objetivo deseable por las posibilidades que algunas de ellas ofrecen de mejores ingresos y mayor independencia. Las organizaciones de estudiantes universitarios han perdido mucha de su influencia debido, entre otras razones, a la marcada estratificación de las universidades peruanas y a las dificultades para establecer canales de comunicación entre estudiantes de las clases medias y populares, cada vez más diferenciados en su horizonte de aspiraciones. Como en otros países de América Latina ha terminado el ciclo del movimiento estudiantil unificado (Brunner, 1986). Las organizaciones de vecinos de los barrios marginales, salvo en algunos asentamientos de reciente formación, han superado ya el período en el cual las demandas de servicios, infraestructura, transporte o titulación, eran un llamado a la acción colectiva. Aunque las asociaciones pueden seguir subsistiendo formalmente, la mayoría de los pobladores privilegian el desarrollo de sus propias búsquedas individuales y familiares, alentando un proceso de diferenciación que vuelve más libres los vínculos, perdiéndose los puntos comunes que alentaban presentación conjunta de demandas y reivindicaciones. Durante el mismo período, el auge de las asociaciones de supervivencia que administraban la recepción de alimentos donados o subsidiados, conducidas e integradas por mujeres, no tiene el mismo potencial político que la tra-

dicional organización de pobladores. Estas nuevas organizaciones han servido ocasionalmente a los partidos políticos para fomentar prácticas políticas clientelistas. No obstante, en la mayoría de los casos, estos grupos establecen casi exclusivamente relaciones de compromiso y negociación con agencias de cooperación internacional, profesionales de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo o directamente con las autoridades gubernamentales. Los partidos no encuentran oportunidades para desarrollar su labor cuando el estilo predominante en estos escenarios es el de estancamiento y desconocimiento recíproco.

Un político que como Fujimori se aparta de los códigos y las rutinas convencionales puede desarrollar su propuesta y recurrir a mecanismos de identificación, sin la necesidad de que su presentación pase por la criba de las orientaciones y juicios de los grupos intermedios constituidos.

LAS FISURAS SOCIALES Y ÉTNICAS

Una elección de segunda vuelta en la que el electorado tiene que optar entre dos candidaturas plantea, en la mayoría de los casos, un momento de polaridad, atenuado sólo si cada una de las fuerzas en pugna resulta capaz de convocar a grupos de diferente procedencia social y cultural. En la oportunidad en que el electorado tuvo que pronunciarse únicamente entre Fujimori y Vargas Llosa, son notables los rasgos de identidad inequívocos e inconfundibles que separan radicalmente a los que se adhirieron a una u otra de estas candidaturas. Los votantes de Cambio 90 son, en su mayoría, campesinos de las provincias más pobres de los Andes, migrantes que hicieron crecer los barrios periféricos de la ciudad de Lima, obreros, vendedores ambulantes, trabajadores, dueños de pequeños talleres, maestros y otros sectores de una clase media empobrecida. La adhesión a Vargas Llosa era proclamada con entusiasmo y a veces con exasperación, por los profesionales exitosos, los empleados de cuello y corbata que ocupaban altas posiciones en el escalafón administrativo y que colocaban con frecuencia en sus escritorios publicidad del FREDEMO como signo de complicidad o desafío con sus ocasionales interlocutores, los dueños de medianas y grandes empresas, los taxistas propietarios de sus vehículos, los notables de provincias. Todo ocurría de tal manera que el conjunto de escisiones de la sociedad peruana se revelaban de manera simultánea. Como señala con acierto Degregori, "especialmente en la última década la modernización avanzó profundizando las diferencias entre ricos y pobres, entre Lima y las provincias, entre la costa y la sierra, y entre criollos de piel clara por un lado y cholos e indios por el otro. La votación de Fujimori proviene abrumadoramente del polo más golpeado por esa modernización: pobres, provincias, andes, cholos e indios" (Degregori, 1990). Más o menos en ese mismo momento, el editorialista de un periódico conservador coincidía con esta in-

terpretación recurriendo a un razonamiento más determinista y unidimensional: "Yo creo que en particular lo que ha habido es una suerte de triunfo póstumo de la prédica marxista de la lucha de clases. En un país agotado de tanta crisis la idea de que hay unos ricos que se llevan todo el dinero de los pobres resulta simple, suficiente" (De Althaus, 1990).

La importante correlación entre procedencia social y opciones políticas no es un hecho nuevo en la política peruana a lo largo de toda la década de 1980, por lo menos en lo que se refiere a los extremos del espectro político, la izquierda y el Partido Popular Cristiano. El APRA en cambio, es un partido que concita adhesiones de distintos sectores sociales además de ser una fuerte presencia en algunas regiones, como las de la costa norte del país. Así, por ejemplo en el caso de Lima, la izquierda consigue en todos los comicios el mayor apoyo en los doce distritos más pobres de la ciudad debido a que tiene correlaciones significativas con la presencia de población obrera e informal. El crecimiento que experimenta esta fuerza política (que en 1983 la llevara incluso a lograr la alcaldía municipal) se vincula al mayor peso que los habitantes de los asentamientos populares tienen en el conjunto de electores en Lima, hecho que se explica fundamentalmente por los procesos migratorios. En 1963, estos distritos representaban el 8.5% de la población electoral, en 1980 el 26.73% y en 1986 el 43.74%. En contraste, el Partido Popular Cristiano obtuvo en toda la década sus porcentajes más altos de votación en los distritos donde predominan los sectores medios y altos (Tuesta, 1989).

Las fisuras sociales, culturales y étnicas en las opciones por Fujimori y Vargas Llosa no resultan demasiado notorias en la primera vuelta electoral, como puede verse en la gráfica 2, si se agrupan los votos por departamentos —el nivel de agregación con el que hasta ahora se puede trabajar de acuerdo a los datos publicados por el Jurado Nacional de Elecciones— y se reúne a estas circunscripciones de acuerdo al mapa de pobreza diseñado por el Banco Central de Reserva con base en un conjunto de indicadores socioeconómicos (en el polo A se encuentran los departamentos más pobres, el D contempla únicamente a Lima y Callao).

Las redefiniciones a las que obliga la segunda vuelta, en la que el electorado que apoya en mayo al APRA y a la Izquierda endosa la mayoría de los votos a Cambio 90, revelan, claramente esta vez, las brechas sociales existentes. Si bien Fujimori gana en los cuatro agrupamientos departamentales con el mayor margen de diferencia, ello ocurre en el caso de los departamentos más pobres que comprenden a Apurímac, Huncavelica, Ayacucho, Cajamarca, Huanuco, Cusco y Amazonas, casi todos ubicados en la sierra y en zonas sacudidas por la violencia política de Sendero Luminoso. Los porcentajes de votos nulos y en blanco en esas áreas (que en general no rebasaron el 8% del total de votos emitidos), fueron los más bajos registrados en los pronunciamientos electorales de los últimos años, expresando así la adhesión a una alternativa de centro izquierda que desmentía las

hipótesis de una inexorable radicalización o de un insalvable escepticismo político de los pobladores que habitan en estos convulsionados territorios.

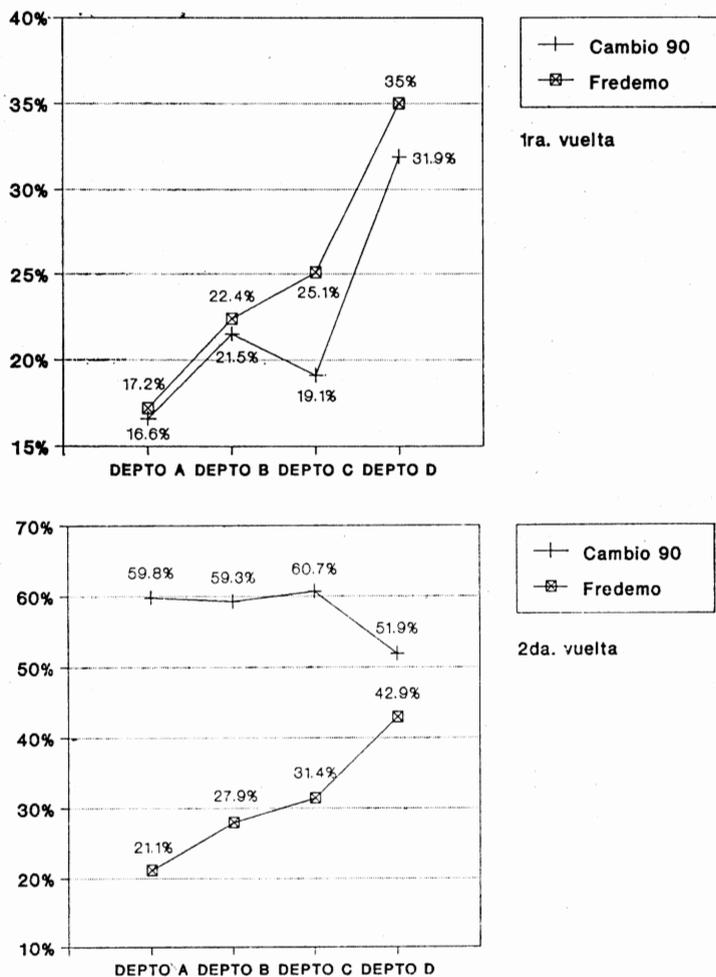
Los resultados electorales se han interpretado también como expresión de una pugna no resuelta, en la que Vargas Llosa surge como intérprete no solamente de las clases medias y altas sino además de sectores populares de origen criollo, en su mayoría racialmente blancos y negros. En contraste, Fujimori resultaría un catalizador de la mayoría de la población de origen andino que quiere acceder a una modernidad tecnológica multirracial y multiétnica sin el lastre de la sujeción cultural a los criollos. Esta "apuesta por una emancipación política de los andinos no se gestaba en el vacío. Su significado profundo, escondido para el observador criollo tras los velos conceptuales de 'la informalidad', los 'humildes', las 'clases populares' o los 'pueblos jóvenes', es el surgimiento de una 'burguesía andina' que pugna por su liberación de un encuadre institucional y cultural criollo". (Golte, 1990).

Sin embargo, se puede sostener una interpretación que reconozca la relación existente entre referentes étnicos y definiciones políticas a partir del repliegue obligado de actores que anteriormente habían tenido una participación mayor en distintos espacios económicos, políticos y sociales. En efecto, "la crisis económica y las dificultades para articular intereses ha hecho más crucial y decisivo el papel de los grupos primarios. La expansión de las economías familiares (algunas exitosas, otras último recurso para garantizar la supervivencia); las situaciones de exclusión y en ocasiones de reclusión de mujeres y de jóvenes cuyas jornadas transcurren exclusivamente en sus hogares y barrios; la competitividad en cuadros de extrema pobreza que genera desconfianza hacia los 'extraños'; la decadencia en las expectativas de la educación y con ello el menor compromiso con las ventajas que depara el ingreso a un escenario más plural y complejo; la falta de trabajo estable que erosiona la racionalidad de optar por la acción colectiva, va limitando los contactos que se realizan a los parientes, los conocidos, los pocos amigos. Se genera así un circuito de informaciones y de opiniones donde pesarán predominantemente las lealtades de larga data, cada vez menos expuestas a confrontación y examen. En esta línea puede interpretarse que los clivajes étnicos cuando toman expresión política no expresan necesaria y únicamente que haya aflorado un discurso elaborado sobre identidades sociales y culturales o el surgimiento de expresiones incontenibles del inconsciente colectivo sino el hecho que este principio de diferenciación se articula sin tropiezos a situaciones como las expuestas de aislamiento, segmentación y desestructuración de otros referentes organizativos" (Grompone, 1990).

En la votación obtenida por Fujimori pueden encontrarse elementos que apuntan el deseo de los sectores populares de desprenderse de la tutela que le pretendía imponer la clase política tradicional, agravada en el caso del FREDEMO, porque las principales personalidades de la coalición formaban

GRÁFICA 2

VOTACIÓN OBTENIDA POR CAMBIO 90 Y FREDEMO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA VUELTAS ELECTORALES, SEGÚN EL MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL



Departamento A. Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Cuzco, Amazonas.

Departamento B. Puno, San Martín, Piura, Ancash, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Junín, Pasco.

Departamento C. Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Moquegua, Ica, Atequipa, Tacna.

Departamento D. Lima, Callao.

FUENTE: Jurado Nacional de Elecciones - Banco Central de Reserva.

ELABORACIÓN: Fernando Rospigliosi.

parte de un estamento blanco y criollo, con el que las mayorías no se sentían identificadas. Estos resultados se explican también por un cuadro de atomización que impide a vastos sectores llegar a visiones globales del país que trasciendan los vínculos cercanos y el marco de necesidades más inmediatas y acuciantes. No se trata entonces de idealizar la emergencia de lo popular ni subrayar los procesos de retroceso y repliegue. Ambas dinámicas se separan a veces, se confunden en otras en un mundo popular cada vez más complejo y diferenciado. De cualquier manera, el resultado de estas elecciones quizá conduzca a que los discursos basados en identidades y referentes étnicos, omnipresentes y soterrados al mismo tiempo durante toda la historia peruana, tomen ahora una expresión más abierta, se conviertan en referentes más explícitos y se discuta en torno a ellos en lugar de permanecer relegados, desplazados u ocultos.

EL VOTO DE LOS INFORMALES

Otra de las razones invocadas para explicar el triunfo de Fujimori se refiere al apoyo que había conseguido concitar por sus planteamientos y por el estilo de su campaña política, a lo largo de todo el vasto universo de la informalidad, entre dueños y dependientes de los pequeños talleres, vendedores ambulantes, transportistas y trabajadores independientes. El candidato de Cambio 90 encontró en la simpleza de su consigna electoral —honradez, tecnología y trabajo— el tono justo para que los empresarios informales se sintieran reconocidos de su presente de laboriosidad y proyectados, además, a un futuro tangible donde sus esfuerzos permitirían obtener escalas superiores de éxito en términos de competitividad, eficacia e influencia. Los analistas que comparten esta opinión entienden que en ese momento, un amplio proceso de movilidad social y económica adquiriría una expresión política. La extensión de la informalidad y en muchos casos sus sorprendentes logros como estrategia ocupacional, debía dar lugar a otros hechos inesperados para quienes no advertían los alcances de este proceso, como el apoyo a un candidato con las características de Alberto Fujimori.

Este respaldo masivo no podría haberse sustentado únicamente en el hecho de que la personalidad política que surgía hubiese encontrado el discurso preciso y las señales adecuadas para dirigirse a este sector del electorado. Cambio 90 (en lo que se podía saber hasta entonces de un movimiento desconocido para las élites políticas), intentaba dar representación a grupos que los demás partidos desconocían o no tomaban en cuenta. Así, el candidato a primer vicepresidente de esta agrupación, Máximo San Román, es presidente de APEMIPE (Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Perú) y postulaba para senadores o diputados a empresarios de procedencia popular, rasgos mestizos y un esfuerzo tesonero para salir adelante en su actividad económica, características todas ellas que con-

trastaban con la atildada presencia de los hombres de negocios que integraban las listas del FREDEMO, quienes, al margen de las intenciones y propuestas reales, daban la imagen de ser parte de un Perú oligárquico más que destacamentos de vanguardia que permitirían que el país accediera, por fin, a la modernidad.

Más allá de estas consideraciones está el peso de las cifras. En toda la década de 1980 se va produciendo un crecimiento de las actividades informales en detrimento de las asalariadas. Villarán estima que sumados los trabajadores y empresarios informales de la ciudad a los pequeños productores campesinos, se llegaba a una cifra cercana a las 4 500 000 personas, el 59% de la PEA total, porcentaje que se traducía en términos parecidos a nivel de electores (Villarán, 1990). Estos estaban entonces en condiciones de definir una elección y los partidos de derecha y de izquierda, a sabiendas, seguían cometiendo errores y omisiones que les impedían enfrentar esta nueva realidad.

Una vez trascendido el nivel de estas primeras comprobaciones, quedan pendientes algunos problemas de interpretación en torno a los alcances de la influencia del sector informal. Los resultados electorales suscitan preguntas relativas a los vínculos entre este último y la política, las condiciones en las que sus integrantes estarían pugnando por crear una nueva institucionalidad y sus vínculos y distancias con otros actores populares, entre ellos los trabajadores asalariados y en particular el movimiento sindical organizado.

En la corriente neoliberal, las cuestiones aquí sugeridas aparecen como desenfocadas o fuera de lugar, ya que en esta corriente los procesos ocurren en un juego de oposiciones entre mercado y Estado y entre coaliciones distributivas (que comprenden a todos los grupos de intereses y muy especialmente a los empresariales y sindicales) y las opciones por las que se ha inclinado el sector informal a favor de una economía libre cuyo desarrollo ha sido obstaculizado y frenado por un cúmulo de disposiciones absurdas y limitantes (De Soto, 1986). Si se parte de estos supuestos, no tiene mayor sentido la preocupación por los cambios que están ocurriendo en la sociedad civil y la relación de éstos con el tipo de sociedad política a la que se va a acceder. La agenda de trabajo básica se centra en la desregulación y la transparencia en las decisiones del gobierno, ambos temas relativos a las reformas institucionales del Estado. En esta problemática el sector informal, invocado recurrentemente para la elaboración de la propuesta, tiene en realidad poco que hacer y decidir salvo una eventual labor de fiscalización por la vía de las reclamaciones individuales; la responsabilidad corre por cuenta de juristas, economistas y técnicos. Mientras tanto, los trabajadores y empresarios de estos pequeños establecimientos realizan sus opciones políticas de manera extremadamente pragmática, oscilando en los diferentes procesos electorales entre distintos candidatos y partidos sin llegar a definir identidades estables en este sentido.

Otras posiciones entienden que está surgiendo una nueva institucionalidad que va a originar nuevas manifestaciones también en el plano político. Ésta tiene como punto de partida la migración a la que se caracteriza como el proceso psicológico, social y cultural más decisivo en la historia del país. Cuarenta años después de iniciado el proceso se expresa en un nuevo estilo de urbanización, en el crecimiento de la economía informal, en la afirmación de la cultura chola y en el fortalecimiento de la organización popular. Los inmigrantes, entiende Carlos Franco, convertidos en plebe urbana, ampliaron la institucionalidad donde su ingreso no era permitido o no era posible: en la ciudad, construyendo nuevos barrios más allá de los confines establecidos; en la economía, a través de la expansión de las actividades informales; en las organizaciones, creando las suyas propias al no tener acceso a los grupos de interés ya constituidos; en la cultura, re-creando o transformando antiguas expresiones o pugnando por la configuración de otras nuevas. Todos estos esfuerzos dan lugar al surgimiento de instituciones que son al mismo tiempo adaptativas y cuestionadoras, funcionales y contestatarias (Franco, 1990).

Estos inmigrantes, en ausencia de un discurso propio, desarrollaron en las primeras etapas compromisos populistas, con la particularidad de que, en su caso, a diferencia del paradigma tradicional, no fijaron lealtades estables a partidos y líderes sino relaciones en términos de costos y beneficios que servían de sustento a calculados procesos de negociación. Sin embargo, a criterio de este autor, parece haber llegado el momento en que “se han creado las condiciones para poner en cuestión el principio mismo de representación por otros. Lo que intuimos entonces es que puede estarse procesando en la plebe urbana el paso de la representación delegada a la autorrepresentación política, es decir, a la constitución de un discurso y una organización política” (Franco, 1990).

Resulta relativamente sencillo advertir que en esta interpretación sobre el surgimiento de una nueva institucionalidad existen algunos cruces e interferencias. Por ejemplo, en los barrios marginales conviven asalariados y trabajadores por cuenta propia y en algunos de ellos, los primeros constituyen el grupo predominante (por lo menos antes de la crisis económica de estos tres últimos años); entre los integrantes del sector informal se encuentra también un grupo significativo de trabajadores no migrantes que desempeñan oficios y conducen sus propios establecimientos, integrando lo que en la década de 1960 se daba en llamar el “sector tradicional de la economía”; la mayoría de los dirigentes de algunos grupos tradicionales de interés en la vida urbana como los sindicatos, son de procedencia migratoria reciente; la cultura de los sectores emergentes parece encontrarse en una fase de transición y todavía no se define un estilo propio en sus expresiones musicales y literarias, aunque existan indicios que se dirigen hacia un período de cambios. Sin embargo, si tomamos en cuenta que el ensayo fue escrito pocos meses antes de la irrupción de Fujimori en la vida polí-

tica, la línea general del razonamiento de Franco impresiona por su lucidez e incluso por su capacidad de anticipar acontecimientos; aun así, vale la pena detenerse en la afirmación sobre la capacidad del sector informal de crear ahora grupos de interés estables y autorrepresentarse, así como la relación entre este hecho y los resultados electorales. Una primera impresión general sugiere que la constitución de nuevas organizaciones requiere de un lento y trabajoso proceso y que la adhesión de un grupo a una determinada candidatura exige de una campaña política impulsada durante un lapso más o menos prolongado para que surta efecto entre miembros y simpatizantes. La construcción de una alternativa bajo estos supuestos no se dispara en dos semanas, la vertiginosa carrera de Fujimori escapa a la dinámica de decisiones de una asociación que tenga que establecer contactos a nivel nacional, informar, persuadir, seguir paso a paso lo que está ocurriendo y evaluar los resultados obtenidos. En el caso del sector informal, se antepone una pregunta previa más radical, que tiene que ver con su potencial para crear nuevas organizaciones capaces de ejercer presión sobre el sistema político y a la vez de convencer a sus posibles integrantes.

La creciente importancia de este estilo de trabajo nos coloca ante un universo de actividades en el cual la interacción personal resultará más significativa y gravitante que los arreglos institucionales pensados en términos de estrategia de mediano y largo plazo. Estos nuevos actores, preocupados por garantizar las mejores condiciones para su ingreso al mercado, van a tender a la utilización de redes para desempeñar sus tareas productivas, comerciales y de servicios, desarrollando así las capacidades requeridas para adaptarse a las cambiantes condiciones de la competencia y volverse también más libres y creativos en sus decisiones, logrando, en ocasiones, construir un marco adecuado para intentar algunas innovaciones en el desarrollo de su actividad. El revés de esta trama permite advertir otros procesos como la creciente descolectivización del proceso de trabajo y el desconocimiento de la legislación laboral, a menudo expresada en el pago de bajos salarios, la prolongación de la jornada de trabajo y la falta de aplicación de las disposiciones de seguridad social.

La informalidad se va conformando como un mundo de múltiples acuerdos personales, algunos duraderos, otros que se establecen y desaparecen en un breve lapso, sustentados en redes familiares, de vecindad (en barrios populares que se han convertido en polos de actividad económica), y en la extensión de las relaciones de subcontratación. En ocasiones, a los actores de este proceso no les resulta sencillo discernir el límite que separa el trabajo independiente de la subordinación y las relaciones de explotación de los vínculos de colaboración y ayuda mutua; en algunos momentos pareciera que todos estos elementos se presentan simultáneamente. Cuando estas prácticas laborales se generalizan, no se logra advertir con claridad las líneas de acción desde las cuales estos actores pueden pensar e instituir representaciones políticas estables. Sólo algunos miembros del sector infor-

mal (por ejemplo los vendedores ambulantes) afrontan circunstancias que podrían llevar a negociar con las autoridades. En caso que se llegara a plantear un conflicto, éste resulta de corta duración y no se le da seguimiento ni existe un control posterior al desenlace de los acontecimientos que suscitara la movilización. La mayoría de las veces, la expresión de las discrepancias de los informales con respecto al gobierno consiste en el desconocimiento o la transgresión calculada de las disposiciones que los primeros consideran desfavorables para sus intereses.

Estos pequeños artesanos y comerciantes dedican sus esfuerzos organizativos a consolidar los vínculos económicos que les garanticen mejores condiciones de competencia sin que la lógica de sus actividades los lleve a plantear una agenda de reivindicaciones ante las autoridades, ni a nominar representantes que se sitúen al margen o por fuera de la red. Así, la dimensión política se concibe como un orden que influye en sus vidas pero que no les incumbe directamente y en estas condiciones, en el momento de definir sus preferencias electorales, es probable que exista poca receptividad a criterios o presiones gremiales o corporativas. Ante estos actores que siguen su propio camino, los partidos no encuentran los procedimientos para realizar una labor sostenida; procuran ganar adhesiones pero saben que están actuando sin un derrotero claro y sin criterios que les permitan validar el efecto que están teniendo los pasos dados en los presuntos destinatarios.

Aun cuando no se trate de decisiones concertadas, el voto de este grupo de trabajadores y empresarios parece identificarse con una opción nacional-popular o populista y en este aspecto resultan muy pertinentes las observaciones ya mencionadas de Carlos Franco. El sector informal, en su mayoría, combina una visión del Estado en la cual se le asigna el cumplimiento de objetivos en términos de redistribución de recursos, aunado a un reconocimiento profundo del valor de los esfuerzos individuales y familiares. En suma, al mismo tiempo que tienen en alta consideración a sus propias iniciativas, interpretan que existen brechas insalvables en los niveles de ingreso, pese a toda la energía y la inteligencia que despliegan en el desempeño de sus actividades. Estas percepciones los inclinan probablemente a una actitud moderada que se caracterizaría por una evaluación positiva de las ideas de cambio social, coexistiendo con orientaciones que los llevan a un profundo individualismo, tal como sugieren los resultados de las dos encuestas realizadas para explorar las relaciones entre el sector informal y la política (Tueros, 1984; Chávez, 1990).

Sin embargo, en un universo tan vasto y diverso como el de la informalidad, con frecuencia se corre el riesgo de incurrir en generalizaciones indebidas. Con base en una investigación preliminar, Chávez encuentra algunos indicios que sugieren que quienes desarrollan actividades de supervivencia, tienden a opciones electorales y políticas que difieren de quienes se encuentran en niveles que les permiten acumular y reinvertir, espe-

cialmente en el sector del comercio donde los estratos de menores ingresos decían apoyar mayoritariamente a Cambio 90 y aquellos de mayores ingresos expresaban su preferencia por el candidato del FREDEMO (Chávez, 1990).

Sin embargo, queda por responder la interrogante acerca de si en la primera vuelta electoral (en la que estaban presentes el APRA y la izquierda), las opciones políticas del sector informal se diferenciaban de un modo más o menos radical del voto de los asalariados con estabilidad laboral. De haber ocurrido, se trataría de una circunstancia excepcional, ya que en los comicios nacionales y municipales que se realizaron durante los años ochenta, la tendencia fue más bien de una coincidencia en las definiciones electorales, quizás debido en buena parte a que tanto las actividades asalariadas como las informales aparecían como respuestas complementarias de las clases populares para enfrentar y escapar a una condición común de pobreza, y en algunos casos, del intento de sostener un progreso económico.

Sin embargo, la crisis económica de los últimos años y la pérdida de influencia del movimiento sindical hace que sea el circuito de la informalidad el que otorga los rasgos decisivos al sistema en lo que se refiere al intercambio de información y la toma de decisiones. La mayoría de los grupos de menores ingresos se encuentran inmersos en un ambiente caracterizado por la densidad y complejidad de su trama social y al mismo tiempo por su poca institucionalización. Las manifestaciones de la sociedad civil se vuelven así más imprevisibles, los cambios de orientación reproducen la misma velocidad y flexibilidad con la que estos actores establecen sus relaciones mercantiles y las élites sienten que se alejan o se esfuman sus posibilidades de imaginar y anticipar los futuros escenarios políticos del país.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LAS ENCUESTAS Y LOS CIRCUITOS ALTERNATIVOS

El triunfo de Fujimori provoca el colapso de un conjunto de ideas convencionales acerca de los estilos para persuadir a la sociedad civil en Perú y para dar cuenta de sus opiniones.¹ Al mismo tiempo que se desplegaba una intensa publicidad televisiva y los políticos y periodistas seguían nerviosamente los resultados de los sondeos, los sectores populares tomaban sus decisiones recurriendo a otras redes de información y cambio de opiniones. Los resultados obligan a pensar sobre las formas de articulación existentes en Perú en esos días, sobre las cuales se tiene solamente algunas intuiciones e ideas generales, muchas de ellas puestas en entredicho por la brecha cada vez mayor que el proceso electoral iba mostrando entre lo que se decía que estaba ocurriendo y lo que efectivamente acontecía. Los

¹ Esta sección ha sido discutida con Jürgen Golte, quien ha sugerido algunas de las ideas e interpretaciones que aquí se exponen.

conceptos de opinión pública, mercado político y las campañas organizadas en base a *spots* televisivos subestimaban la eficacia de los pequeños actos en plazas, calles y mercados, o la difusión de volantes mimeografiados ritarios que imaginaban interlocutores en las mayorías de este país cuando cimiento minucioso de las tendencias de los ciudadanos, quedaron al final como pretensiones carentes de legitimación, intenciones de grupos minoritarios que imaginaban interlocutores en las mayorías de este país cuando en realidad respondían a otros referentes y tomaban sus propias opciones. Los últimos sondeos —dos días antes de las elecciones en la segunda vuelta— mostraban que entre las empresas encuestadoras más conocidas, algunas pronosticaban el triunfo de Fujimori y otras el de Vargas Llosa, pero en uno y otro caso, con pocos márgenes de ventaja. Sólo una de ellas, apartándose de la tendencia general, preveía una distancia de algo más de seis puntos a favor del candidato de Cambio 90. Sin embargo, tampoco esta última empresa podía interpretar correctamente lo que estaba sucediendo. En efecto, los resultados finales fueron de 56.7% de los votos para Fujimori y 35.7% para Vargas Llosa. Es también notable el contraste entre la inversión publicitaria realizada y los resultados obtenidos por las distintas fuerzas políticas. De acuerdo a estimaciones realizadas por una agencia de mercadeo, el FREDEMO gastó en la campaña electoral de primera vuelta 12 234 386 dólares; el Partido Aprista Peruano, 2 747 942; la Izquierda Socialista, 1 498 046; Cambio 90, 197 916 y la Izquierda Unida, 159 688. Intentaremos aquí interpretar las razones que explicarían los desfases que provocaron el desconcierto de las élites políticas, de los técnicos de las empresas encuestadoras y de los asesores de campañas políticas, tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Las fallas de las previsiones de las encuestas se deben, en parte, a errores en el diseño del marco muestral y de los instrumentos de medición y quizá en contados casos, responde a la intención de manipular la voluntad de los electores. Sin embargo, se presentaron otros problemas que trascienden este nivel y se relacionan con las fisuras sociales y étnicas ya mencionadas. Hasta pocos días antes de las elecciones, las empresas registraban un porcentaje de indecisos que —como lo mostraron los resultados finales— eran en su mayoría ciudadanos que ya se habían decidido por el apoyo a Fujimori. Este voto que las agencias especializadas en sondeos dieron en llamar “voto escondido” se explicaba debido a que la adhesión al candidato de Cambio 90 llegó a aparecer como un reto a las estructuras establecidas, teniendo en cuenta la agresiva campaña en su contra por parte de los medios de comunicación que pretendían deteriorar la imagen que tantas voluntades concertara en la primera vuelta. Si un observador se atuviera estrictamente al discurso de Fujimori, éste emergía como una opción de centro o de centro izquierda en favor del acuerdo social y la pacificación del país. Sin embargo, más allá de este mensaje, su candidatura se enfrentaba a los canales de comunicación que los electores relacio-

naban con los principales centros de poder e influencia. Los entrevistados recelosos se rehusaban a manifestar explícitamente su opinión (como había sucedido en anteriores elecciones con las fuerzas de izquierda), por lo que los cambios de orientación que se procesaban aceleradamente no eran registrados o se subestimaban.

Un ambiente de polarización como el que caracterizó a la segunda vuelta electoral provocaba además actitudes de desconfianza. La presentación correcta y presuntamente neutral de los entrevistadores aparecía como una inclinación por el FREDEMO. Los encuestados querían evitar un imaginado conflicto estimando que al mismo tiempo el hecho de no manifestar la decisión tomada, conservaba sus márgenes de autonomía.

Situándonos a otro nivel de interpretación, es posible suponer que el procedimiento de las empresas de opinión pública de dividir a la población en cuatro estratos por nivel de ingresos —alto, medio, bajo y muy bajo— tiende a enfatizar la división entre ricos y pobres y a no considerar con el suficiente cuidado otras diferencias que se presentaban en las complejas sociedades urbanas del Perú de estos días. En el caso de Lima, por ejemplo, algunos trabajos recientes de sociólogos y antropólogos sugieren la coexistencia de dos grupos de clase media, uno que lleva varias generaciones viviendo en la ciudad, desempeñando frecuentemente tareas como empleados de “cuello y corbata”, y otro de inmigrantes vinculados a la pequeña empresa o al trabajo calificado independiente. Entre uno y otro de estos sectores existen pocos espacios compartidos; no existen en el trabajo, ni en los colegios a que concurren sus hijos, ni en los estilos y lugares de recreación. La clase media tradicional parece haberse inclinado mayoritariamente por el FREDEMO; la emergente clase media de andinos habría orientado sus preferencias al candidato de Cambio 90. Entre los sectores populares es probable que ocurra una división parecida, pero en términos más moderados. En teoría, el peso de estos factores étnicos no afectaría las capacidades de previsión de las encuestas si ellas se realizaran respondiendo a niveles significativos de representatividad. Sin embargo, en un país pluricultural y pluriétnico, donde coexisten y compiten diversos códigos de comunicación, las preguntas directas sobre preferencias electorales sin el auxilio de una reflexión sociológica más cuidadosa ni del recurso a otras interrogantes de carácter exploratorio, corren el riesgo de introducir sesgos y distorsiones que al principio pueden pasar inadvertidos.

En la campaña desarrollada por los medios de comunicación, el FREDEMO cometió una serie de errores que le dieron un carácter contrario a la idea que se quería transmitir. Una actitud que se pretendía mostrar como de transparencia, sinceridad y eficacia personal fue vista por muchos de los que recibían estos mensajes como expresiones de arrogancia, intolerancia y exacerbadión de divisiones y enfrentamientos. La publicidad de Vargas Llosa anunciaba la inevitabilidad de un ajuste y no fue sino en la segunda vuelta, cuando ya resultaba demasiado tarde, que tomó

en cuenta los costos que iba a enfrentar la población, y decidió difundir las presuntas virtudes de un programa de emergencia social dirigido a los sectores de menores ingresos. Este surgía de golpe y forzosamente como tema de preocupación, lo que afectaba su credibilidad por más que ya estuviera incluido en el proyecto de esta coalición, desde tiempo atrás. Un *spot* representaba a los empleados estatales en la figura de un mono, más o menos en los mismos días en que un candidato a diputado del FREDEMO estimaba que una medida inevitable sería el despido de centenares de miles de servidores públicos. El ataque al APRA y a las fuerzas de izquierda era tal, que hacía imposible que los seguidores de estas organizaciones pudieran dar su voto a Vargas Llosa en la segunda vuelta con todo y las dudas que les pudiera suscitar un gobierno conducido por Alberto Fujimori. Muchos de los postulantes a senadores y diputados por el FREDEMO desarrollaron campañas políticas cuyo costo superaba varias veces la totalidad de los emolumentos que recibirían en los cinco años de gestión en caso de ser electos representantes. En una situación de desconfianza hacia la clase política, el pequeño triunfo que podía lograr uno de estos candidatos contrastaba con los sentimientos de suspicacia y sospechaba que producía el conjunto del FREDEMO.

Al margen de los errores de una campaña que demandara gastos millonarios, los medios de comunicación, al intentar un acercamiento a lo popular lo hacían empleando imágenes convencionales y estereotipadas. Así, los pobladores de procedencia andina aparecían desarrollando actividades tradicionales, o lo que las élites urbanas consideraban como la visión de lo tradicional (por ejemplo, la música de algunas provincias que poco o nada significaban para los habitantes de otras regiones del Perú). La diversidad cultural del país pretendía inútilmente salvarse por el atajo de una invocación generalizadora. Sin embargo, aún más grave que este primer error fue la presentación de lo andino como una dimensión inamovible, inmodificable, inmersa en un tiempo en el cual se confundían pasado, presente y futuro. Los pobladores que han inmigrado de la provincia a Lima y a las ciudades intermedias, los habitantes de los pequeños poblados y aun de las comunidades campesinas, con diferente intensidad, han definido objetivos que apuntan a una mayor participación en la vida política, económica, social y cultural. Esta perspectiva que expresa la vigencia de proyectos más o menos estructurados de ingreso a la modernidad, resultó parcialmente desconocida por el FREDEMO pese a que era precisamente el tema de la modernidad, lo que pretendía presentarse como su aporte y su novedad para iniciar un proceso de transformaciones sociales radicales en el Perú.

Así, la tecnoburocracia de los medios de comunicación suponía estar cubriendo los circuitos de difusión de informaciones básicas, prefigurando la imagen de una torre de transmisión que desde un punto central difundía su mensaje. Sin embargo, mientras esto sucedía, la opinión se iba formando

en redes alternativas y respondía a formas tradicionales de intercambio que seguían el modelo del contagio, el encadenamiento, el rumor y la conversación en mercados, calles y plazas. Coexistían entonces dos estilos para establecer vínculos políticos: el de los medios masivos y los de la comunicación oral ubicados en el marco restringido de las personas a quienes se les otorga confianza. En consecuencia no existía en Perú una cultura de masas homogénea que racionalizara el trazado de una estrategia unidimensional. En contraste con Vargas Llosa, que repetía un discurso que sólo era acogido por sectores medios y altos cuya lealtad ya había sido ganada, Fujimori —quien mantenía su perfil bajo y buscaba el contacto personal o daba la idea de que intentaba conseguirlo— era el candidato que se adecuaba más a los criterios con los que la mayoría de la población iba construyendo sus referentes. Vargas Llosa convocaba desde fuera y desde lejos, Fujimori utilizaba como base para ganar voluntades los mecanismos de la identificación y la proyección (Alfaro, 1990; Quesada, 1990).

El Perú "oficial", explotando casi exclusivamente los medios masivos y las encuestas, debió enfrentar el hecho de que los canales con los cuales podía llegar a la población y vencerla se le habían escapado o nunca los habían tenido realmente bajo su control. Sin embargo, se sabe poco de las vías alternativas. Es razonable pensar que en una sociedad donde pesan tanto las economías familiares y los pequeños talleres y negocios, los líderes de opinión, ante el desencanto frente a la clase política, se ubican entre las personas reconocidas por sus méritos y capacidades en estos ambientes laborales y afectivos. Y que a partir de ellos se va creando un círculo de intercambio de noticias y de opiniones con un movimiento en cascada que comienza con los actores más influyentes, se extiende a familiares y trabajadores y llega a través de comerciantes, transportistas, intercambio de correspondencia y noticias telefónicas a las pequeñas ciudades y a partir de ahí, al medio rural. Como en el caso ya visto del estilo de trabajo del sector informal, son redes que se hacen y se deshacen. No es que los sectores populares hayan creado una estructura de decisiones desconocida y omnipresente que se pronuncia en todas las ocasiones y para todos los problemas: en este caso, el mecanismo se puso en funcionamiento debido al vacío provocado por la insatisfacción con las otras fuerzas políticas. Por otra parte, en un contexto donde comenzó a desempeñar un papel tan importante la comunicación directa, el estilo de difusión desarrollado por los grupos de evangelistas, acostumbrados a dar cuenta de sus creencias de puerta en puerta en todos los barrios y penetrando los lugares donde la propaganda oficial no llega o no encuentra eco, tiene una efectividad que no alcanzaría en condiciones diferentes a las que aquí se presentaron. Los volantes mimeografiados, repartidos con un comentario previo por quien los entrega, eran muchas veces bien recibidos. Las imágenes difundidas por la televisión quedaban en el otro extremo de esta realidad, buscando respuestas y reacciones que nunca llegaron a expresarse.

Entre las sorpresas que provocó el triunfo de Fujimori, una de las más impactantes se relaciona con la precariedad de algunas de las visiones de las ciencias sociales respecto del país. A fines de los años sesenta, se entendía a la sociedad peruana como un archipiélago formado por islotes y cuyo rasgo predominante era la desarticulación entre regiones y sectores económicos y sociales. El creciente proceso de urbanización introdujo algunos matices y modificaciones a este planteamiento. Sin embargo, esta perspectiva (correcta para el período en el que fue formulada), se mantenía frente a los acontecimientos del momento. Los resultados electorales del 8 de abril y del 10 de junio demostraron que las clases populares de distinta procedencia y ocupación mantenían un vínculo más fluido y eficaz y un comportamiento más homogéneo del que se reconocía hasta ese momento.

LOS RIESGOS Y LAS INCERTIDUMBRES

La alta votación obtenida por Fujimori —por lo que toca a la ruptura de antiguos vínculos y a la búsqueda de otros nuevos— indica tanto el escepticismo y descrédito de la política, como una demostración de la vitalidad con la que se quiere encontrar una nueva salida, aunque sus resultados futuros no se alcancen a visualizar con claridad. Paradójicamente, este pronunciamiento electoral muestra la volatilidad de las identidades populares definidas en líneas de clase, étnicas y culturales. Sin embargo, el triunfo de la opción que trata de ocupar el espacio moderado del centro y el centro izquierdo demuestra los desequilibrios existentes, la profundidad de las brechas sociales y la diversidad de canales a través de los cuales se forman los juicios y se toman las decisiones. Una sociedad en la que durante toda una década se fue profundizando la división entre la élite política y los sectores populares, y en la cual los actores débilmente estructurados no encontraban los procedimientos para que sus necesidades se convirtieran en demandas y reivindicaciones, trató de encontrar un medio de escapar a la polarización, en el momento en que todos los acontecimientos —la crisis económica, el asedio de los grupos alzados en armas, la debilidad de las estructuras de mediación, los procesos de exclusión social— parecían dirigirse a ésta.

El nuevo escenario produce necesariamente realineamientos políticos. Los 14 senadores y 33 diputados de Cambio 90 no garantizan la constitución de un bloque homogéneo. Un movimiento que irrumpe y crece vertiginosamente en tan corto plazo seguramente expresa a distintas tendencias, prioridades e intereses que sólo después de las elecciones comienzan a expresarse con claridad. El FREDEMO en tanto coalición de la derecha, pierde vigencia política, por lo menos en esta coyuntura, y es probable que el Movimiento Libertad, que tuviera en Vargas Llosa a su más reconocido dirigente, se incline progresivamente hacia una alternativa liberal orto-

doxa; Acción Popular, por el peso de sus bases provincianas y una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios políticos y sociales, podría intentar trasladarse al centro del espectro, mientras que el Partido Popular Cristiano procuraría jugar un papel de arbitraje entre estos dos polos. Las izquierdas que han experimentado una severa derrota electoral ya están sometidas, en esta coyuntura, a un conjunto de presiones y exigencias que las conduce a tomar posiciones antes de hacer un balance de las razones que explican su reciente fracaso. Algunos sectores se encuentran dispuestos a colaborar con el gobierno, otros procuran ganar el liderazgo de la oposición, en tanto que muchos militantes de sus partidos más radicales, desvinculados del trabajo cotidiano en las precarias organizaciones sociales existentes, se sienten atraídos por la prédica de los grupos que preconizan la violencia política. Sólo el Partido aprista mantiene vigentes sus estructuras partidarias formales; sin embargo le queda un largo camino por recorrer para recuperar las adhesiones perdidas y en ese trayecto, establecer con claridad los alcances de una eventual colaboración con el nuevo gobierno y los límites de su acción opositora. A la atomización social y a la crisis de las representaciones se agregan ahora algunos síntomas de desorganización y hasta de disolución en los partidos políticos.

En este ambiente, comienza a trabajar un parlamento en el cual el gobierno elegido no cuenta con una mayoría absoluta (a diferencia de lo que ocurría en los regímenes anteriores), circunstancia que lo obligará a buscar acuerdos con otras fuerzas políticas. En un clima de incertidumbre y de improvisación resulta difícil establecer las condiciones para llegar a consensos, y saber si éstos ayudarán finalmente a afianzar una precaria institucionalidad.

Fujimori no es un candidato que haya generado las expectativas y la confianza que en oportunidad de su ascenso al poder suscitara Alan García. Los sectores populares siguen apoyando a líderes reformistas, que prometan al mismo tiempo cumplir metas de crecimiento y de distribución. Sin embargo, el nuevo presidente no provoca en la mayoría de sus votantes adhesiones firmes e incondicionales; predomina en cambio un clima de tensa espera y una exigencia de resultados a corto plazo como el procedimiento acorde para juzgar a quien ha invocado en su campaña política las virtudes de la eficiencia y el pragmatismo. Fujimori ha conseguido acumular votos pero no reclutar adherentes convencidos; su vertiginoso ascenso puede ser el antecedente de una rápida caída en su popularidad. Desde las alturas del poder, no encuentra interlocutores estables ni en la política ni en la sociedad.

En estas condiciones, las corporaciones pueden ocupar el lugar que corresponde a los partidos, los grupos de interés y las organizaciones sociales. En el primer mes de gobierno las fuerzas armadas han tenido injerencia directa en el cambio de los comandos militares y en la reestructuración de las jefaturas policiales. A la Iglesia católica se le ha encomendado la eje-

cución de un programa de emergencia social, una vez iniciada la aplicación de medidas rigurosas de ajuste económico. Uno de los riesgos que se cierne sobre la estabilidad democrática radica en que Fujimori considere la precariedad de las sociedades civil y política como un hecho que actúa a su favor y quede atrapado por las reglas de un juego que él mismo quiso promover.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfaro, Rosa María, "Votar por ti pero no contigo", en suplemento de *Página Libre*, 8 de julio, 1990.
- Balbi, Carmen Rosa, *Identidad clasista en el sindicalismo. Su impacto en las fábricas*, DESCO, 1989.
- Bernales, Enrique, "El funcionamiento del sistema político en la constitución de 1979", en *La constitución diez años después*, Fundación Friedrich Naumann, 1989.
- Brunner, José Joaquín, *El movimiento estudiantil ha muerto: nacen los movimientos estudiantiles*, FLACSO, Santiago de Chile, 1985.
- Chávez, Eliana, "¿Votaron los informales por Fujimori? Una reveladora encuesta", en *Revista Quehacer*, núm. 64, DESCO, mayo-junio, 1990.
- De Althaus, Jaime, editorial del diario *Expreso*, 8 de junio, 1990.
- Degregori, Carlos Iván, "El triunfo de Fujimori y la historia de un deicidio", *Página Libre*, 17 de junio, 1990.
- De Soto, Hernando, *El otro sendero*, Ed. El Barranco, 1986.
- Franco, Carlos, "Exploraciones en otra modernidad. De la migración a la plebe urbana" (mimeo.), 1990.
- Golte, Jürgen, "Mundos en conflicto", en *Revista SI*, núm. 174, junio, 1990.
- Grompone, Romeo, *Nuevos actores y sistema político* (mimeo.), 1990.
- Parodi, Carlos, *Scr obrero es algo relativo. Obreros, clasismo y política*, Instituto de Estudios Peruanos, 1987.
- Rospigliosi, Fernando, *Perú, sorprendentes resultados* (mimeo.), 1990.
- Quesada, Oscar, entrevista en el suplemento de *Página Libre*, 8 de junio, 1990.
- Tuesta, Fernando, *Pobreza urbana y cambios electorales en Lima*, DESCO, 1989.
- Villarán, Fernando, "El fenómeno Fujimori o la crisis de las ideas convencionales", en *Revista Quehacer*, núm. 64, DESCO, mayo-junio, 1990.